

EL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

CILLERO SALOMÓN, PEDRO

e-mail: Pedro.Cillero@uv.es

Unidad de Investigación de Hacienda Pública y Economía del Sector Público

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

RESUMEN

La evolución de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas en los últimos años se ha caracterizado por una significativa expansión en muchos sectores y actividades que con anterioridad no existían, o bien eran desempeñadas por otros niveles de gobierno. Este desarrollo del nivel competencial de las Comunidades Autónomas ha ido acompañado tanto de un incremento sustancial de los niveles de endeudamiento vivo, como del montante que representa la carga de intereses de la deuda pública sobre los respectivos presupuestos autonómicos.

Esta tendencia expansiva parece necesario contenerla tanto por la propia salud financiera de los entes autonómicos, como por factores exógenos impuestos desde otros niveles de administración, supranacional y central, en aras de la consecución de una estabilidad financiera y presupuestaria.

En esta comunicación se pretende realizar un análisis del proceso de expansión competencial y de su influencia en la situación financiera actual de las Comunidades Autónomas, haciendo especial hincapié en el caso concreto de la Comunidad Valenciana.

INTRODUCCIÓN

La evolución de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas en los últimos años se ha caracterizado por una significativa expansión en muchos sectores y actividades que con anterioridad no existían, o bien eran desempeñadas por otros niveles de gobierno. Este desarrollo del nivel competencial de las Comunidades Autónomas ha ido acompañado tanto de un incremento sustancial de los niveles de endeudamiento vivo, como del montante que representa la carga de intereses de la deuda pública sobre los respectivos presupuestos autonómicos.

Esta tendencia expansiva parece necesario contenerla tanto por la propia salud financiera de los entes autonómicos, como por factores exógenos impuestos desde otros niveles de administración, supranacional y central, en aras de la consecución de una estabilidad financiera y presupuestaria.

En esta comunicación se pretende realizar un análisis del proceso de expansión competencial y de su influencia en la situación financiera actual de las Comunidades Autónomas, haciendo especial hincapié en el caso concreto de la Comunidad Valenciana.

En un primer apartado se realiza un análisis del sistema de financiación autonómica actualmente vigente para el quinquenio 1997-2001 en el que, junto a una sucinta presentación de los recursos tributarios disponibles, se incide especialmente en las medidas introducidas para mejorar la corresponsabilidad fiscal del nivel de administración autonómica.

En el segundo apartado se presenta la situación normativa y competencial actual de las Comunidades Autónomas, distinguiendo el modelo de financiación con el que cuentan y las competencias de gasto público que desempeñan.

En el tercer apartado se intenta establecer una medición de la dimensión de las diferentes Comunidades Autónomas mediante un ratio de estructura como el que relaciona el total de obligaciones reconocidas y liquidadas de cada Comunidad, o grupo de Comunidades, respecto del PIB respectivo.

En el cuarto apartado se presentan algunos aspectos de la situación del endeudamiento de este nivel intermedio de gobierno, incidiendo especialmente en el análisis del ratio endeudamiento / PIB y en su evolución durante los últimos años.

Finalmente, se analiza la situación actual de la Comunidad Valenciana y la perspectiva de su posible evolución a la luz de los resultados presentados en los apartados anteriores

y del importante crecimiento de la deuda de la Generalitat Valenciana en los últimos años de acuerdo con los datos del Banco de España.

ANÁLISIS DEL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La creación de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) como nivel intermedio de gobierno en el marco del Estado español ha supuesto un elevado grado de descentralización en el ejercicio de competencias muy amplias junto con un alto grado de ejecución del gasto público por parte de este nivel de gobierno. En contrapartida, el nivel de descentralización fiscal por el lado de los ingresos ha sido tradicionalmente mucho más reducido con un importante peso de las subvenciones condicionadas en el conjunto de la financiación de las CC.AA. de régimen común.

La conjunción de estas dos características ha dado como resultado un bajo nivel de corresponsabilidad fiscal respecto del que sería deseable según la teoría clásica del federalismo fiscal. En orden a avanzar en la consecución de niveles más elevados de responsabilidad fiscal por parte de las CC.AA. se han producido tres medidas legislativas que afectan a la estructuración de un sistema de financiación que garantice la existencia de una responsabilidad definida sobre los ingresos y gastos públicos por parte del nivel de gobierno responsable de una competencia concreta, de forma que los impuestos recaigan en la mayor medida posible sobre los individuos que se benefician de los bienes y servicios públicos provistos por cada nivel de gobierno. En concreto, el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de septiembre de 1996 y las posteriores reformas de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas han introducido importantes modificaciones en la autonomía fiscal de las CC.AA. de régimen común.

El objetivo último de los cambios más importantes introducidos mediante las tres medidas legislativas mencionadas anteriormente es incrementar la autonomía fiscal de las CC.AA. actuando en un doble sentido. Por un lado, cediéndoles parcialmente la recaudación de este impuesto junto con la concesión de una capacidad normativa limitada de aplicación general a todas las CC.AA. de régimen común, excepto aquéllas

que votaron contra este nuevo modelo y que, por lo tanto, no participan en este nuevo régimen de cesión del IRPF, a saber, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En concreto, el sistema de financiación basado en tributos cedidos, sobre los cuales las CC.AA. no disfrutaban de ninguna capacidad normativa aunque sí de gestión y recaudación, y transferencias sobre la base del porcentaje de participación en los ingresos del Estado, cambia hacia un sistema que incorpora al IRPF como impuesto parcialmente cedido, con un objetivo final del 30% a las CC.AA. Esta cesión se articula concretamente en un tramo autonómico del impuesto, con capacidad normativa cuando las competencias de educación hayan sido totalmente traspasadas a las CC.AA. del artículo 143 de la Constitución. Hasta ese momento, la participación se concreta en un tramo autonómico del 15% y una participación de otro 15% en la cuota líquida ingresada por los residentes en cada CC.AA.

Así pues, la financiación de las CC.AA. durante el quinquenio 1997-2001 proviene de cuatro fuentes de financiación incondicionada básicas: los tributos y tasas cedidos, la cesión del 15% de la tarifa del IRPF, la participación en el 15% de la cuota líquida del IRPF y el porcentaje de participación en los ingresos del Estado. A continuación, vamos a realizar un análisis somero de cada uno de ellos:

a/ TRIBUTOS CEDIDOS

Continúan siendo los mismos que en los años anteriores: el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y la Tasa sobre el Juego. Lo que cambia es la concesión de capacidad normativa propia a las CC.AA. sobre elementos de estos tributos como el tipo impositivo, la tarifa, el establecimiento de un mínimo exento, la fijación de algunas reducciones, la concesión de exenciones y la determinación de las bases imponibles.

b/ CESIÓN DEL 15% DE LA TARIFA DEL IRPF

Es la principal novedad de este sistema de financiación. Se introduce una división en la aplicación de la tarifa del IRPF en dos tramos, uno estatal y otro autonómico. El tramo autonómico se calcula aplicando una tarifa de gravamen propia, obtenida tomando el 15% del tipo de gravamen general de cada tramo de base imponible para determinar dicha tarifa autonómica.

Esta tarifa aplicada sobre la base liquidable regular nos cuantifica la cuota íntegra autonómica. De esta cantidad deberá deducirse el 15% de la cuantía global de las deducciones de la cuota existentes para calcular así el porcentaje de recaudación concedido a las CC.AA. Para finalizar, deberá añadirse el 15% de los ingresos que se deriven de la liquidación de las actas de inspección territorializadas.

c/ PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL 15% DE LA CUOTA LÍQUIDA DEL IRPF

En principio sólo gozarían de este recurso las CC.AA. del artículo 151 y las del artículo 143 que tuvieran transferidas las competencias de educación. Sin embargo, dado que el resto de CC.AA. de régimen común han ido asumiendo las competencias educativas paulatinamente, este instrumento de financiación se irá extendiendo a todas las CC.AA. de régimen común.

d/ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO

Una vez calculado o no, en su caso, el porcentaje de participación del 15% sobre la cuota líquida del IRPF, se calculará el porcentaje de participación en los ingresos no cedidos del Estado que incluye la suma total de los ingresos del Estado por los impuestos directos e indirectos (excluidos los susceptibles de cesión), más las cuotas de la Seguridad Social y las cotizaciones al desempleo.

Sobre las cuantías de financiación de cada CC.AA. calculadas a partir de la aplicación de los instrumentos anteriores actuarán dos limitaciones. En el anterior sistema de financiación, los recursos de las CC.AA. evolucionaban en función del crecimiento del PIB, o bien del incremento del gasto equivalente del Estado. En el actual, se constituirá un Fondo de Garantía que asegure que los recursos derivados del IRPF evolucionen en la misma cuantía que el PIB. Sin embargo, en el caso de que la recaudación estatal del IRPF se incremente en menor cuantía que el PIB, sólo se garantizará a cada CC.AA. el 90% de la evolución del IRPF estatal.

Por otra parte, el Fondo de Garantía proporcionará subvenciones a aquellas CC.AA. cuya financiación incondicionada crezca por debajo del incremento del total de esta financiación para el conjunto de CC.AA. , garantizando que sus recursos crezcan al menos un 90% del incremento total de los recursos incondicionados de este nivel intermedio de gobierno.

SITUACIÓN NORMATIVA Y COMPETENCIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La observación de las Comunidades Autónomas supone que se aprecien, de manera inmediata, una diversidad de situaciones significativa, tanto por el lado del modelo de financiación con el que cuenten, como por las competencias de gasto que mantienen.

Tal como señala Monasterio Escudero (1994), respecto de la primera cuestión, son seis los modelos de financiación que pueden distinguirse, con grandes diferencias entre ellos, hecho que provoca que todas las Comunidades Autónomas no cuenten con los mismos recursos para financiar las competencias de gasto asumidas (Ver Esquema).

La distinción inicial en la que debemos reparar es la que disfrutaban las Comunidades con un sistema foral de financiación, bien bajo la forma de Concierto económico, en el caso del País Vasco, bien bajo la forma de Convenio económico, en el caso de Navarra. Este hecho diferencial respecto del resto de Comunidades acogidas al sistema de financiación común, junto con un nivel competencial en temas financieros muy amplio no homologable con el que disfrutaban las demás, nos ha decidido a dejar fuera del estudio a ambas comunidades.

En relación con las Comunidades Autónomas del sistema de financiación común, tradicionalmente pueden distinguirse dos grandes bloques de comunidades: las que cuentan con competencias de gasto “amplias”, donde se incluyen, además de las competencias comunes, la educación y la sanidad. Este primer grupo accedió a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución Española, salvo en el caso de la Comunidad Valenciana que, a pesar de haber accedido por la llamada “vía lenta” del artículo 143, dispone del mismo nivel competencial de las anteriores. En el segundo bloque, situaríamos a las Comunidades Autónomas con competencias “reducidas”, en las que tienen cabida, hasta el momento, las competencias comunes a todas ellas más la competencia de educación que ha sido paulatinamente asumida por todas ellas.

En el esquema siguiente se presenta un resumen de la actual situación competencial de las diferentes Comunidades Autónomas en base a las anteriores agrupaciones.

ESQUEMA			
NIVELES COMPETENCIALES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS			
	CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION	COMUNIDAD AUTONOMA	COMPETENCIAS DE GASTO
FORAL	Concierto + Cupo + + Relaciones Internas Hacienda Vasca + Financiación Municipal	PAÍS VASCO (3)	AMPLIAS + Financiación municipal
	Convenio + Aportación + + Financiación municipal	NAVARRA (3)	
	Sistema LOFCA + Financiación de Sanidad + Gestión Financiera Local	ANDALUCÍA CATALUÑA (1,2,3) GALICIA C. VALENCIANA	AMPLIAS (Comunes + Educación + Sanidad)
	Sistema LOFCA + Financiación de Sanidad + Imposición Indirecta Propia	CANARIAS (2)	
COMUN	Sistema LOFCA	ARAGÓN CASTILLA y LEÓN EXTREMADURA BALEARES (2,4)	REDUCIDAS (Comunes)
	Sistema LOFCA + Gestión Financiera Local	CASTILLA-LA MANCHA	
	Sistema LOFCA + Hacienda Provincial	ASTURIAS MADRID MURCIA LA RIOJA	
	Sistema LOFCA + Hacienda Provincial + Gestión Financiera Local	CANTABRIA	
En su caso tienen además las siguientes competencias: (1) instiuciones penitenciarias, (2) en obras hidráulicas, (3) policía. (4) No tienen la competencia en protección de menores			

Fuente: Monasterio, C. (1994), actualizado con las competencias de Educación a principios de 2000.

DIMENSIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

La situación descrita tiene lógicamente su influencia en el tamaño de la Administración Autonómica, el cual puede establecerse a través de distintos indicadores básicos que reflejan las diferencias señaladas.

En términos de Baiges Planas, dos ratios admitidos, como de estructura, para medir esta dimensión son los que tratan de relacionar el total de las Obligaciones Reconocidas y Liquidadas de cada Comunidad, o grupo de Comunidades, con el PIB o la población respectiva. Por mostrar un ejemplo, nos referimos aquí al primero de ellos, si bien con el alternativo, que toma como criterio de referencia la población, los resultados obtenidos llevan a la misma conclusión.

Cuadro 1. Obligaciones Reconocidas y Liquidadas respecto del PIB - (%).

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<i>Andalucía</i>	13,8	16,8	16,5	17,6	18,9	19,1	20,2	20,6	20,6	19,6	21,3	21,4	22,7	22,3
<i>Canarias</i>	8,3	10,3	12,2	11,3	12,3	13,6	13,5	12,3	15,7	17,9	17,2	16,6	16,6	16,8
<i>Cataluña</i>	10,2	11,1	12,1	11,7	12,7	13,8	16,5	13,7	13,9	13,3	13,2	13,8	11,8	11,8
<i>Galicia</i>	8,4	8,7	10,2	10,9	12,5	18,4	21,4	21,3	20,6	20,6	20,2	20,3	20,6	20,4
<i>C. Valenciana</i>	6,9	6,5	9,9	11,3	12,5	13,7	14,5	14,6	14,3	12,2	13,5	13,1	13,0	13,0
Total 151	10,2	11,4	12,6	13,0	14,3	15,6	17,4	16,4	16,6	15,8	16,4	16,5	16,1	16,0
<i>Aragón</i>	2,6	2,8	2,7	3,0	3,7	4,4	4,8	4,6	6,5	5,8	7,1	7,3	8,6	10,7
<i>Baleares</i>	2,7	2,8	2,1	2,3	2,6	3,2	3,3	2,9	2,9	3,0	3,3	3,8	5,6	5,8
<i>Castilla y León</i>	4,5	3,7	3,6	3,8	4,7	5,3	5,4	5,7	8,1	8,5	9,0	9,1	9,1	9,7
<i>C-La Mancha</i>	6,4	7,2	7,4	6,9	6,1	7,6	7,9	10,2	12,7	12,6	12,1	12,3	13,7	13,5
<i>Extremadura</i>	6,8	7,4	7,5	6,6	7,5	8,2	9,4	8,9	8,0	9,6	14,0	14,8	16,8	16,9
Total 143 Plur.	4,5	4,5	4,5	4,4	4,8	5,6	6,0	6,4	8,0	8,1	9,0	9,2	10,2	10,9
<i>Asturias</i>	4,3	4,6	4,5	4,6	5,3	6,0	6,9	6,8	7,1	6,2	7,6	7,6	8,1	7,6
<i>Cantabria</i>	4,4	6,1	8,1	6,8	8,3	7,8	5,3	5,5	3,3	4,3	4,7	6,6	7,3	8,3
<i>Madrid</i>	2,1	2,5	3,5	2,9	3,5	4,0	3,5	3,6	3,5	3,4	4,0	4,2	4,7	5,0
<i>Murcia</i>	3,8	4,3	4,6	6,1	5,1	5,1	4,8	4,8	4,6	4,4	5,3	5,9	7,1	7,1
<i>Rioja (La)</i>	3,8	4,4	4,4	4,0	5,5	6,6	5,8	5,3	5,6	5,8	5,6	6,2	6,3	9,5
Total 143 Unipr.	2,8	3,2	4,0	3,7	4,2	4,6	4,2	4,3	4,1	4,0	4,6	4,9	5,5	5,8

Fuente: Elaboración propia a partir de DGCHTT e INE.

Nota: Los datos de 1998 y 1999 han sido calculados a partir de cantidades presupuestadas de las CCAA.

Tal como se observa, las diferencias son apreciables entre las distintas Comunidades Autónomas, según el nivel de competencias del que disponen. Destacan por grupos de Comunidades, como parece lógico, al disponer de mayor número de las mismas, las del art. 151, presentando valores significativamente más elevados que las del art. 143. A su vez, en este último grupo, son las pluriprovinciales las que, en conjunto, prácticamente duplican el valor de las uniprovinciales, hecho que también se justifica en la diferente estructura administrativa con la que cuentan.

En cuanto a la evolución de este indicador, por grupos de Comunidades, puede observarse como el incremento (en términos de tasas de variación), entre los años inicial y final de la serie, se produce en las Comunidades Autónomas del art. 143, tanto en las pluriprovinciales, como en las uniprovinciales; llegando a multiplicar aproximadamente por dos el valor del ratio considerado de las Obligaciones Reconocidas y Liquidadas con respecto al PIB.

Descendiendo en el nivel de análisis, se extraen las siguientes consideraciones. En las Comunidades del art. 151 sobresalen, por el volumen alcanzando en 1999 (teniendo en cuenta, como ya se ha afirmado, que los dos últimos años se refieren a cantidades presupuestadas), las de Andalucía (22,3%), Galicia (20,4%) y Canarias (16,8%); siendo especialmente significativas, en lo que a la evolución se refiere, las tendencias seguidas por Galicia y Canarias, cuya presencia en el sistema económico regional se ha llegado a multiplicar por algo más de dos.

Del análisis de las Comunidades del art. 143 pluriprovinciales, pueden extraerse prácticamente las mismas consideraciones que en el caso anterior. En todas ellas se duplican, al menos, los valores del año 1986, si bien el nivel alcanzado en algunas no es elevado. Es el caso de Baleares (5,8% en 1999). Sin embargo, en el resto de Comunidades, de manera particular, en Extremadura (16,9%), Castilla - La Mancha (13,5%); Aragón (10,7%) y Castilla y León (9,7%) los valores toman niveles significativos. Especial referencia tiene Aragón que si bien parte de un nivel reducido (2,6% en 1986) multiplica su valor por algo más de 4, a lo largo del período objeto de estudio.

En el tercero de los grupos es donde más se ha contenido el gasto, suponiendo la tercera parte, en términos relativos, del realizado en las Comunidades del art. 151 y la mitad de las del art. 143 pluriprovinciales. Destacan, a pesar de este hecho, las Comunidades de La Rioja (9,5%); Cantabria (8,3%) y Asturias (7,6%).

Una consideración adicional que, con carácter general, puede esbozarse es la que hace referencia al cambio de tendencia, o al menos a la contención, existente a lo largo del período; debido, quizás, a la definición y establecimiento de los Estados de

Consolidación Presupuestaria. Esta coyuntura se observa de manera singular en los años 1991 y 1992. Así ocurre en los grupos de Comunidades del art. 151 y del art. 143 uniprovinciales, continuando con una evolución marcadamente alcista las Comunidades pluriprovinciales del art. 143.

Una última característica que se advierte en el análisis de los datos intragrupos es la referente a la correlación observada entre la renta y riqueza de las Comunidades Autónomas y la menor presencia de este nivel de administraciones públicas en el sistema económico regional. Serían los casos de Cataluña y Valencia en el grupo primero; Baleares en el segundo y Madrid entre las uniprovinciales.

SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO AUTONÓMICO

Como ya se presentó en la introducción, en este apartado observamos la evolución de algunos aspectos de la financiación presupuestaria autonómica. En concreto, analizamos la evolución del endeudamiento bruto propiamente dicho mediante el ratio deuda viva / PIB a lo largo de los años 1986 a 1999 para todas las Comunidades Autónomas.

Cuadro 2 – Deuda / PIB (%)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<i>Andalucía</i>	0,7	0,6	0,7	1,4	2,8	3,7	5,3	6,6	7,2	7,8	8,8	9,5	9,2	8,6
<i>Canarias</i>	2	1,6	1,7	1,7	1,7	2,5	2,9	4,1	4,8	4,6	6	4,9	4,9	4,1
<i>Cataluña</i>	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	3	3,9	4,9	6,2	7,9	8,6	9,3	9	8,9
<i>Galicia</i>	0,6	0,5	0,4	0,6	1,7	4,2	5,6	7,4	8,6	8,6	9,1	9,2	8,9	8,6
<i>C. Valenciana</i>	0,8	0,7	0,8	1,2	1,9	3	4,1	5,2	6,1	6,3	7	7,6	8,2	9
Media Art.151	1,3	1,2	1,2	1,4	2,1	3,3	4,4	5,6	6,6	7,0	7,9	8,1	8,0	7,8
<i>Aragón</i>	0,3	0,5	0,6	0,5	0,5	1,2	2,2	3,5	4,3	4,5	4,8	5,4	5,1	4,9
<i>Baleares</i>	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	1,7	2,2	2,7	2,7	2,9	2,6	2,9	2,8	2,7
<i>Castilla y León</i>	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	1	1,6	2,2	3	3	3,1	3,4	3,2	3,1
<i>C-La Mancha</i>	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,8	1,7	2,1	2,8	2,7	2,8	2,8	3,1	2,8
<i>Extremadura</i>	0,4	0,3	0,3	0,2	0,5	0,7	3,4	4,8	5,7	5,9	6,3	5,9	6	6,1
Med. Art.143 Plur	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	1,1	2,2	3,1	3,7	3,8	3,9	4,1	4,0	3,9
<i>Asturias</i>	0,9	0,8	0,6	1,1	1,3	2,3	3	2,9	3,5	3,6	3,6	3,8	4	3,9
<i>Cantabria</i>	1,4	2,3	2,4	4,3	5,8	6,7	5,7	5,7	4,9	3,9	2,6	2,7	2,5	3
<i>Madrid</i>	0,2	0,3	0,6	1,1	1,5	2,3	2,6	3,3	3,8	3,6	3,7	3,9	4,1	4
<i>Murcia</i>	1,1	1,7	1,9	3,1	3,5	4,4	5,1	5,6	5,6	5,7	5,4	5,1	4,9	4,8
<i>Rioja (La)</i>	0,5	0,4	0,3	1,3	2,4	3,8	3,8	4,1	3,8	4,3	3,7	3,4	3,4	3,6
Med. Art.143Unip	0,8	1,1	1,2	2,2	2,9	3,9	4,0	4,3	4,3	4,2	3,8	3,8	3,8	3,9

Fuente: BE e INE. Nota: 1998 dato previsto y 1999 dato avance.

En el cuadro anterior observamos la evolución del ratio deuda – PIB en términos porcentuales para el conjunto de Comunidades Autónomas clasificadas según las

agrupaciones utilizadas y los promedios de estos grupos. Los datos que hemos utilizado han sido elaborados a partir de las publicaciones del Banco de España y del INE. El PIB regional, por su parte, ha sido enlazado preservando el período 1986 -1995 al no tener un carácter definitivo los últimos años de la serie.

A partir de esta información podemos analizar donde se producen los mayores crecimientos, dentro de la tendencia general de crecimiento sostenido que reflejan las cifras presentadas. Si bien los resultados iniciales son que la Comunidad Valenciana (9), Extremadura (6,1) y Murcia (4,8) se sitúan por este orden a la cabeza de las distintas agrupaciones mientras que Canarias (4,1), Baleares (2,7) y Cantabria (3) representan el polo opuesto, aunque en este caso cuentan con especificidades propias que explican los bajos valores de este ratio.

Por otra parte, podemos constatar dos hechos que se ven reflejados en el cuadro, el primero es como a principios de los noventa (por la situación de crisis, admisión de competencias o gastos extraordinarios) una gran parte de las Comunidades estudiadas ven incrementado notablemente su endeudamiento como los casos ilustrativos de Andalucía, Galicia o Extremadura. Segundo, a finales de los noventa se produce la situación inversa, es decir, que en algunos casos, las Comunidades ralentizan su gasto como en el caso de Canarias, Cantabria, Galicia y La Rioja. Sin embargo, resulta llamativo el caso de la Comunidad Valenciana que presenta un crecimiento sostenido a lo largo de toda la década, pasando de un valor de 1,9 en 1990 hasta el valor de 9 en 1999, multiplicando por 4,7 el valor del ratio presentado.

Si analizamos los datos según las agrupaciones efectuadas, vemos que la evolución de los promedios de las Comunidades del art. 143 pluriprovinciales (0,3 en 1986 y 3,9 en 1999) y las Comunidades del art. 143 uniprovinciales (0,8 en 1986 y 3,9 en 1999) es muy similar, tanto en la evolución como en los valores del ratio que presentan. El promedio de las Comunidades del art. 151 evoluciona desde un 1,3 en 1986 hasta un 7,8 en 1999, duplicando los valores que presentan las dos agrupaciones anteriores. A pesar de que si obviáramos el dato de Canarias (4,1 en 1999), las cuatro Comunidades restantes presentan valores cercanos a 9, valor que alcanza la Comunidad Valenciana en este último año. La evolución de esta última Comunidad es muy significativa, sobre

todo si observamos la evolución descendente en los últimos años estudiados que presentan las cifras de Andalucía, Cataluña y Galicia.

Si nos centramos en el caso de las Comunidades del art. 143 pluriprovinciales, resaltan los casos de Aragón (0,3 en 1986 y 4,9 en 1999) y, sobre todo, Extremadura (0,4 en 1986 y 6,1 en 1999) que presenta una evolución explosiva del ratio multiplicándolo por 15 a lo largo del período estudiado. La situación de esta última comunidad parece más grave si observamos que este crecimiento se ha producido en apenas ocho años (0,7 en 1991 y 6,1 en 1999). En el extremo opuesto nos encontramos a las Comunidades de Baleares (2,7 en 1999) y Castilla-La Mancha (2,8 en 1999), las cuales presentan valores claramente por debajo de la media.

En cuanto a la evolución del grupo de las Comunidades del art. 143 uniprovinciales destacan los casos de Murcia (1,1 en 1986 y 4,8 en 1999) y Madrid (0,2 en 1986 y 4 en 1999). Hay que destacar la positiva evolución en el primer caso en la que se observa una tendencia descendente del ratio desde principios de la década y la estabilización de los datos de Madrid a partir de 1993. En el extremo opuesto del grupo se situaría Cantabria que, además, presenta una evolución descendente curiosa desde el máximo alcanzado (5,7 en 1992 y 1993) hasta el 3 que alcanza en 1999. Dicha evolución parece claramente ligada a los avatares políticos de esta Comunidad en dichos años.

LA COMUNIDAD VALENCIANA. RESUMEN Y PERSPECTIVAS.

La situación de la Comunidad Valenciana presenta unos rasgos muy peculiares. Por una parte hay que tener en cuenta que se trata de una Comunidad que alcanzó la autonomía por la vía del artículo 143 y que, sin embargo, en un plazo relativamente corto alcanzó un nivel competencial amplio perfectamente homologable con las Comunidades del artículo 151.

Si tomamos el primer ratio presentado, Obligaciones Reconocidas y Liquidadas respecto al PIB, como un indicador de la presencia e importancia de este nivel de gobierno en el sistema económico regional, vemos que presenta los valores más bajos de este ratio (13 en 1999) dentro de su grupo junto con Cataluña (11,8 en 1999) frente a un valor medio de 16 en 1999. Este dato nos indicaría la presencia de una correlación

negativa entre la renta y riqueza de una Comunidad y el peso del gasto público del nivel autonómico en la actividad económica global.

Pero donde realmente se nos presenta una evolución preocupante es en los datos derivados del segundo de los indicadores utilizados, el ratio Deuda / PIB. Además de que el último de los valores presentados (9 en 1999) es el más alto, tanto de su grupo de Comunidades, como del conjunto de las estudiadas, la evolución sostenidamente creciente en los últimos años hace que se haya duplicado prácticamente en los años 1994 (4,9) a 1999 (9). Dicha evolución, que podríamos calificar de explosiva, ha continuado en el último año, alcanzando unos valores de 980.013 millones de ptas. en valores absolutos de deuda viva, con un crecimiento de 293.000 millones de ptas. entre los años 1998 y 1999. Hay que destacar que en el último año 2000 el ratio estudiado alcanzó un valor máximo de 10,3, no recogido en este estudio, según los últimos datos disponibles del Banco de España.

Esta evolución hay que situarla en un contexto de descenso continuado de los tipos de interés reales y nominales que ha reducido considerablemente el peso de la carga de la deuda, por lo que debemos inferir la existencia de una expansión constante de los saldos de deuda pública viva asociados a un crecimiento del gasto público efectuado por la Generalitat Valenciana, lo que nos sitúa en una situación de debilidad financiera ante una perspectiva negativa de la posible evolución de los tipos de interés en el futuro inmediato junto con una ralentización de las tasas de crecimiento.

BIBLIOGRAFÍA

BAIGES PLANAS, J. (1991): “Déficit, deuda y solvencia de las Administraciones Públicas. El caso de las Corporaciones Locales y de las Comunidades Autónomas”. En Hacienda Pública Española, núm. 117/1, pp. 7-15.

BANCO DE ESPAÑA. Boletín Estadístico. Varios Años.

BAÑOS, J., CILLERO, P. y SELVA, C. (2000): Situación Financiera de las Comunidades Autónomas. En Revista Valenciana de Hacienda Pública. Palau 14. Septiembre//Octubre 98.

CORONA, J. Y PUY, P. (1998): “La reforma del IRPF y sus implicaciones autonómicas: responsabilidad fiscal e inestabilidad financiera”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, números 2 y 3.

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES. Liquidaciones Presupuestarias de las Comunidades Autónomas. Varios años.

GALT, V. & LOPEZ, V.R. (1998): “East Midlands Economy Forecasting Model: 1996-2000”. Occasional Papers in Economics. The Nottingham Trent University. Nº 98/8. Nottingham, U.K., 21 pp.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, N. (1998): “ La reforma del IRPF y el sistema de financiación”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, números 2 y 3.

GARCIA-DURAN DE LARA, J.A. (1994): El Estado del Bienestar de cara al siglo XXI. Seminario sobre el papel del Sector Público en la Actividad Económica. Programación y Autonomía de las Comunidades Autónomas. Barcelona, 27 de mayo de 1993. Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autònoms, Barcelona, 1994, pp. 12-15.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Anuario Estadístico. Varios años.

MINISTERIO DE HACIENDA: DIRECCION GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES. Liquidaciones Presupuestarias y Presupuestos de las Comunidades Autónomas. Varios Años.

MONASTERIO, C. y SUAREZ, J. (1993): El Endeudamiento Autonómico. Teoría y evidencia empírica. Ed. Fundación BBV.

MONASTERIO, C. (1994): “La evolución reciente de la Hacienda Autonómica”. En Papeles de Economía Española. Núm. 59, pág. 241. Fundación FIES.

MONASTERIO ESCUDERO, C. (1998): “La reforma del IRPF y sus efectos sobre la financiación autonómica”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, números 2 y 3. Varios autores (1999): La Ley del IRPF y su Nuevo Reglamento, Recoletos Cía. Editorial, Madrid.

RAYMOND J.L.(1995): “El problema de la ‘explosividad’ potencial de la deuda pública”. Papeles de Economía Española. Nº 62, pp. 341-343.

SUAREZ PANDIELLO, J. (1991): Notas sobre el endeudamiento de las Comunidades Autónomas. En Papeles de Economía Española, núm. 48, pp. 256-265.